



PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA.

María Josefina PLÁ REGULES, C.I. 1.104.997-2, con domicilio real en la calle--
-----, Montevideo en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) como presidenta actual de la misma como surge del acta en donde se me inviste de tal calidad, y actuando como Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), en virtud de lo dispuesto por la Ley Nro. 18.446 y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), ratificado por el Estado uruguayo por la ley Nro. 17.914, de fecha 21 de Octubre de 2005, con domicilio real y constituido en Avda. Bvar Artigas 1532 y electrónico INDDHH1@poderjudicial.gub.uy, ante Ud. se presenta y DICE:

Que en forma urgente viene a presentar acción de amparo regulada por el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia y las disposiciones de la Ley N° 16.011, de fecha 19 de diciembre de 1988, contra el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) con domicilio en la calle Piedras 482, en mérito a las siguientes consideraciones de hecho y fundamentos de derecho.

1- LEGITIMACIÓN

La INDDHH fue creada por la ley 18.446 de fecha 24 de diciembre de 2008 como una institución estatal con amplios cometidos y facultades en la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el Derecho Internacional (artículos 1,4 y 35 de la ley).

En forma más específica el literal C) del artículo 4 de la ley le otorga competencia para *“Promover la adopción de las medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos en los que el Estado sea parte”*.



Concretamente sobre la acción de amparo que se interpone el artículo 35 literal E de la citada ley le asigna la facultad de *“Presentar denuncias penales e interponer recursos de habeas corpus o amparo, sin perjuicio de solicitar otras medidas judiciales cautelares que considere pertinentes”*.

Por su parte, el artículo 195 del Código de la Niñez y Adolescencia -que regula la acción de amparo para la protección de los derechos de los niños y adolescentes- establece que la acción de amparo, en este ámbito, específico se regirá por el régimen general establecido en la Ley Nro. 16.011 previendo que la podrá deducir, además, el Ministerio Público o cualquier interesado, institución o asociación de interés social ya sea que lo establezca la ley o que a juicio del propio tribunal garantice una adecuada defensa de los derechos comprometidos.

Surge claramente de la ley 18.446 que, además de asignarle esta facultad en forma expresa (literal E del artículo 35 citado), la INDDHH garantiza, en forma legítima, una adecuada defensa de los derechos comprometidos.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), función asignada a la INDDHH en el artículo 83 de la ley de su creación, se encuentra regulado por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura citada.

El objetivo del OPCAT es el de establecer, por intermedio de órganos internacionales y nacionales independientes, un sistema de visitas periódicas a los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad a fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Para lograr este objetivo los Estados partes deben crear Mecanismos Nacionales de Prevención a cuyos efectos, además de garantizar su independencia funcional (artículo 18), le otorga una serie de facultades en su artículo 19 (examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad, hacer recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de estas personas) como así también se comprometen a concederles acceso a toda información sobre el número, lugar, trato, condiciones y lugares relativo a las personas privadas de libertad, la posibilidad de entrevistarse personalmente y elegir libremente el lugar de visita sin anuncio previo.



El MNP, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Protocolo, ha operado en función de un criterio amplio en la definición de persona privada de libertad. A estos efectos, se entiende por privación de libertad cualquier lugar bajo la jurisdicción y control del Estado *“donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad , bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito “.....”por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente, por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública”.*

De esta manera, las niñas, niños, y adolescentes que son institucionalizados por orden judicial en el sistema de protección y se encuentran en hogares del Instituto de la Niñez y Adolescencia (INAU) en el Uruguay, están comprendidos en la labor y mandato del MNP.

En el MNP existe un equipo interdisciplinario con las capacidades y experticia requerida en el artículo 18.2 del OPCAT que monitorea en forma específica y periódica los lugares donde se encuentran niñas, niños y adolescentes que han sido institucionalizados por mandato judicial al encontrarse amenazados o vulnerados sus derechos conforme a lo previsto en los artículos 117 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA)

2- LA PROCEDENCIA DE ESTA ACCIÓN DE AMPARO (ADMISIBILIDAD)

El INAU cuenta para la atención en salud mental, en modalidad residencial, para niñas, niños y adolescentes que presentan episodios agudos, dos centros en todo el país; la Clínica API Los Robles y el Centro de Salud Mental Klinos, ambas instituciones privadas con vínculos contractuales con el INAU que dan cobertura a 49 niñas, niños y adolescentes.

En el monitoreo periódico del MNP a la Clínica API Los Robles y al Centro de Salud Mental Klinos se ha constatado la vulneración de una serie de derechos con rango constitucional y legal, siendo procedente la utilización de la presente acción en virtud de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la ley 16.011 de 19 de diciembre de 1988 y artículo 195 del CNA. En este sentido, el hecho manifiestamente ilegítimo surge de lo constatado por el MNP en las clínicas API Los Robles y el Centro de Salud Mental Klinos, lugares donde se pudo constatar la permanencia de niñas, niños y adolescentes, atendidos por el Sistema de Protección INAU con posterioridad a tener alta médica.



Conforme a lo dispuesto en las mencionadas disposiciones se cumplen los requisitos para entablar la presente acción en mérito a las siguientes consideraciones:

- A) Se trata de una omisión de parte de una autoridad estatal que amenaza, restringe y lesiona derechos y libertades de las niñas, niños y adolescentes con ilegitimidad manifiesta.
- B) Las omisiones en las que incurre el Estado no se encuentran comprendidas en las exceptuadas de la acción de amparo por el artículo 1 literales a, b y c de la Ley 16.011 por no tratarse de actos jurisdiccionales, ni actos emanados de la Corte electoral, ni de leyes o decretos de Gobierno Departamental. Por otra parte, no existe un proceso jurisdiccional pendiente.
- C) Se carece de otro medio judicial y, los medios administrativos disponibles han demostrado ser claramente ineficaces para la protección de los derechos afectados debido a las circunstancias existentes. En todo caso existe la presunción legal que los otros medios jurídicos de protección resultan ineficaces.
- D) Se requiere que se proceda en forma urgente.
- E) La presente acción se interpone dentro del plazo establecido en el artículo 195 del CNA, dado que aborda la situación constatada al momento de realizar las últimas visitas de monitoreo a las clínicas API Los Robles y al Centro de Salud Mental Klinos, con fechas 26 y 27 de febrero de 2019 por los equipos del MNP integrados por la trabajadora social María José Doyenart y el abogado Daniel Díaz en la primera, y por las trabajadoras sociales María José Doyenart y Soledad Pérez en la última. Igualmente, se entiende que estamos frente a una omisión de la autoridad estatal que se produce en forma permanente y continua, que cesa únicamente, con la efectiva derivación a un dispositivo de INAU acorde a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.

3- OMISIÓN DE PARTE DE UNA AUTORIDAD DEL ESTADO Y HECHO MANIFIESTAMENTE ILEGÍTIMO.



Como ya fuera expresado, el hecho manifiestamente ilegítimo surge de lo comprobado por el MNP en el monitoreo de las clínicas API Los Robles y el Centro de Salud Mental Klinos, en donde se pudo constatar la permanencia de niñas, niños y adolescentes con posterioridad a tener alta médica. Es importante señalar, que las niñas, niños y adolescentes son derivados por el INAU frente a episodios de crisis en fase aguda, vinculados a padecimientos mentales complejos, asociados o no al consumo de sustancia psicoactiva. Esta derivación es realizada por razones médicas y se encuentra limitada en tiempo, debiendo finalizar una vez obtenida el alta médica. De esta forma, es responsabilidad del INAU disponer un cupo dentro del Sistema de Protección a efectos de atender la situación en concreto de la niña, niño y adolescente.

El equipo del MNP realizó una primera visita inspectiva a la Clínica API Los Robles el 7 de setiembre de 2016. Las constataciones, observaciones y recomendaciones se enviaron al directorio del INAU contenidos en el Informe N° 69/MNP/2016, el que se agrega con la letra "A". Allí se planteó la necesidad de acotar el tiempo de espera de niñas, niños y adolescentes con alta médica, y la previsión de un régimen de atención y cuidado cotidiano diferenciado de aquellos que se encuentran internados transitando una fase aguda.

El 31 de mayo 2018 se recibe en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo una resolución judicial del Juzgado Ldo. de Familia de 26° turno, que pone en conocimiento la situación de un adolescente internado en el Centro de Salud Mental Klinos que se encontraba en una situación similar a la planteada en autos, dando noticia a la INDDHH *"teniendo en cuenta la violación a sus derechos pese a las reiteradas disposiciones judiciales, situación en la que podrían estar otros menores en igual condición."*

El MNP toma conocimiento de esta situación y envía un oficio al Directorio de INAU, solicitando información en relación a las niñas, niños y adolescentes que se encontraban internados con alta médica. El Directorio informa el 10 de julio del año 2018, mediante expediente N° 21171-18 que se agrega con la letra "B", que se encontraban internados en las clínicas API Los Robles y el Centro de Salud Mental Klinos un total de 33 niñas, niños y adolescentes que poseían alta médica. De acuerdo a la información brindada, los tiempos de tratamiento médico oscilaban de 15 días a dos meses como máximo. Mientras los tiempos de espera para ser trasladados iban de 7 días a más de dos años y medio, con un promedio de 5 meses.



Transcurrido un plazo más que razonable desde que se emitieran y comunicaran las recomendaciones del MNP, el día 5 de noviembre de 2018 se realizó una visita de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones del MNP a la Clínica API Los Robles. En el día de la visita estaban internados en la clínica API Los Robles un total de 50 niñas, niños y adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los 9 y 18 años de edad, de los cuales 35 fueron derivados del sistema de protección de INAU, 2 de centros de INISA, un paciente derivado de ASSE y 12 pacientes derivados del Centro Hospitalario Pereira Rosell.

De todos quienes se encontraban internados al día de la visita se constató la situación de 23 niñas, niños y adolescentes, derivados del sistema de protección de INAU, que se encontraban con alta médica. El tiempo promedio en que pueden permanecer las niñas, niños y adolescentes en la clínica con el alta médica es muy variado y prolongado, se constató adolescentes con más de 2 años de alta. También se estableció que era común una demora de meses para que los niños fueran trasladados de la Clínica Los Robles a un centro de protección de 24 horas.

Posteriormente, con fecha 26 de febrero de 2019, se realizó una nueva visita a la Clínica API Los Robles, en donde se constató, la permanencia con alta médica un total de 24 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 14 son derivados del Sistema de Protección de INAU, 2 del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), 7 Centro Hospitalario Pereira Rosell y 1 de ASSE, tal como surge del listado de internos que se agrega a las presentes actuaciones con la letra “C”.

En relación al centro de Salud Mental Klinos el Equipo del MNP, constató, en la visita realizada con fecha miércoles 27 de febrero de 2019, que permanecen con alta médica un total de 4 adolescentes, de los cuales 2 son derivados del Sistema de Protección de INAU y 2 del SMI, tal como surge del listado de internos agregado a las presentes actuaciones con la letra “D”.

De esta manera y tal como fuera mencionado pese a las reiteradas gestiones realizadas por el MNP esta situación de vulneración de derechos se ha mantenido en el tiempo, afectando, al momento de la visita, a un total de 16 niñas, niños y adolescentes, quienes luego de obtener el alta médica tienen derecho a ser derivados a otro dispositivo del INAU que garantice el desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones



materiales y afectivas que le permitan un desarrollo pleno y alcanzar el mayor bienestar posible.

Tal como fue expresado a las autoridades del INAU, en Oficio Nro. 520-2019, agregado a estas actuaciones con la letra “E” *“la larga permanencia de niñas, niños o adolescentes en una clínica para episodios agudos, afecta aspectos de la personalidad fundantes en dichas etapas vitales, presentando un gran impacto en su desarrollo y crecimiento” (.....) Las hospitalizaciones provocan alteraciones físicas, psicológicas y sociales en los niños, niñas y adolescentes, por lo que se debe considerar como último recurso y por el menor tiempo posible, para su atención sanitaria. Es un elemento altamente estresante, causado por diversos factores difícil de aminorar: la vivencia de una crisis en fase aguda, los procedimientos relacionados al tratamiento, las medidas de contención empleadas, el aislamiento, la medicalización, etc”.*

Asimismo, durante el tiempo en que la/os niñas niños, y adolescentes están internados no tienen contacto con el exterior, ni participan en actividades educativas o recreativas fuera del centro. Tampoco pueden, dada las características de los centros, usar o tener algún tipo de objeto personal, lo que afecta el desarrollo de la propia identidad e imagen, aspecto fundamental a su edad. El control conductual y la estricta vigilancia limita las actividades de la/os niñas, niños y adolescentes, los que no cuentan con espacios o momentos individuales, que respeten su derecho a la intimidad. Todas estas limitaciones encuentran su fundamento en una intervención médica, que tiene por finalidad atender una crisis en fase aguda y cesan con el alta médica. De esta manera, toda prolongación de esta limitación de derechos, más allá del alta médica, debe ser considerada ilegítima.

Es importante señalar que se concretaron diversos espacios de trabajo con el INAU, que tuvieron como objetivo generar acciones que revirtieran las situaciones constatadas. A estos efectos se mantuvieron 1) reuniones periódicas con el equipo designado por el Directorio del INAU para trabajar las constataciones del monitoreo del MNP con fecha 3 de agosto, 14 de setiembre y 16 de noviembre de 2018; 2) reuniones con el Director del Programa de Intervenciones Especializadas del INAU, Marcelo Peleteiro, con fecha 29 de mayo y 15 de junio de 2018. 3) encuentro con la Directora del INAU, Marisa Lindner, con fecha 02 de agosto de 2018



En las diversas instancias de diálogo, el INAU manifestó la necesidad de valorar el entorno que recibe a esta/os niñas niños, y adolescentes, a fin de identificar posibles riesgos bio-pisco-sociales. Por otra parte, argumentó, que la falta de plazas disponibles en los centros de protección 24 hs, capaces de realizar una contención y cuidado posterior al egreso de una clínica para atención de agudos, generaría dificultades para el traslado de quienes poseen el alta médica.

De esta forma y tal como surge en el Oficio 520/2019 agregado a estas actuaciones las acciones planteadas por el INAU para fortalecer las posibilidades de egreso de niñas, niños y adolescentes de los centros de salud mental para agudos, se dividen en;

- Acciones de largo plazo; coordinar con la Administración de Servicios de Salud del Estado y el Ministerio de Salud Pública para mejorar las prácticas de abordaje. *“Ésta es una acción de largo plazo, que de no establecerse un plan progresivo de abordaje y el respectivo cronograma de este proceso de articulación, no tendrá repercusiones en el corto y mediano plazo.”*
- Acciones de mediano plazo; aumentar el cupo para la atención en crisis agudas. Acción que no daría respuesta a la disponibilidad de cupos en los centros para posibles derivaciones.
- Acciones de corto plazo; a principio de junio en el INAU comenzaron un análisis del 100% de las situaciones con alta médica, con el objetivo de *“(...) sistematizar los motivos de permanencia, las necesidades de protección asociadas al egreso hacia otros proyectos especializados y no especializados...”* A partir de esta acción, el 26 de julio de 2018, se envió al INAU el Oficio N° 480, solicitando las acciones realizadas para promover la derivación o egreso de los 33 niños, niñas y adolescentes que se encontraban internados con alta médica al 10 de junio, oficio que aún no ha tenido respuesta.

En este sentido el MNP considera que las acciones planteadas son de mediano plazo, o son acciones que no dan respuesta al motivo del amparo. Desde diciembre de 2016, que el MNP planteó su preocupación en relación a las internaciones prolongadas, no se visualizan acciones inmediatas y planificadas para dar respuesta a esta situación, así como tampoco acciones de largo plazo que aborden la problemática de fondo.



En este sentido y pese a todas las gestiones realizadas en vía administrativa no se han realizado acciones por parte del INAU, a efectos de poner fin de manera definitiva a esta situación, que claramente vulnera derechos de niños, niñas y adolescentes. Es por esta razón, que se debe considerar que se han agotado los recursos administrativos.

4. Omisión que se mantiene en el tiempo a pesar de las acciones proactivas del MNP que siguen lesionando derechos.

Esta situación de vulneración de derechos se ha mantenido hasta la actualidad, afectando a un total de 16 niñas, niños y adolescentes al momento de realizar las últimas visitas al Centro Clínica Api Los Robles y al centro de Salud Mental Klinos, con fecha 26 y 27 de febrero de 2019, respectivamente.

En relación a la situación de los 16 niños, niñas y adolescentes derivados por el Sistema de Protección de INAU, es importante mencionar el caso de -----, quien fuera derivada del Centro el Tribal INAU con fecha 05 de abril de 2017 y tiene alta médica desde el 18 de mayo de 2017, permaneciendo en esta situación por casi dos años.

Para mayor ilustración a la Sede se detalla la situación de los 14 niños, niñas y adolescentes derivados por el sistema de protección INAU y que permanece en la clínica API los Robles con alta médica:

- ingreso 05-04-2017 - alta médica 18-05-2017
- ingreso 27-12-2017 – alta médica 15-03-2018
- ingreso 03-04-2018 – alta médica 10-05-2018
- ingreso 25-04-2018 – alta médica 04-10-2018
- ingreso 11-08-2018 -alta médica 11-10-2018
- ingreso 25-08-2018- alta médica 25-10-2018
- ingreso 10-09-2018 – alta médica 04-10-2018
- ingreso 14-09-2018 – alta médica 11-10-2018
- ingreso 20-09-2018 – alta médica 18-10-2018



- ingreso 24-09-2018 – alta médica 20-12-2018
- ingreso 03-11-2018 – alta médica 13-12-2018
- ingreso 28-11-2018 – alta médica 03-01-2019
- ingreso 28-12-2018 – alta médica 04-01-2019
- ingreso 28-12-2018 – alta médica 31-01-2019

En relación al centro de Salud Mental Klinos el Equipo del MNP constató, en la visita realizada con fecha miércoles 27 de febrero de 2019, que permanecen con alta médica 2 adolescentes de los cuales 2 son derivados del Sistema de Protección de INAU y 2 del SMI.

Los dos casos derivados del INAU refieren a la adolescente ----- con fecha de ingreso 03-10-2018 y alta médica de fecha 26-11-2018 y el adolescente ----- con fecha de ingreso 05-01-2019 y alta médica de fecha 11-02-2019.

En todos los casos el alta médica ha sido comunicada al INAU por parte de las Clínicas API y Klinos. De esta manera y tal como ya fuera mencionado pese a las reiteradas gestiones realizadas por el MNP esta situación de vulneración de derechos se ha mantenido en el tiempo, afectando al momento de las visitas, a un total de 16 niños, niñas y adolescentes quienes luego de obtener el alta médica tienen derecho a ser derivados a otro dispositivo del INAU que garantice su desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan alcanzar el mayor bienestar posible.

A efectos de determinar fehacientemente la cantidad de niños, niñas y adolescentes, que al momento de interponer el presente recurso permanecen en las mencionada Clínicas con alta médica, se solicita al Juzgado se oficie a la Clínicas API los Robles y al centro de Salud Mental Klinos a efectos de informar la cantidad de niños, niñas y adolescentes derivados del Sistema de Protección de INAU, que se encuentran con alta médica, adjuntando en todos los casos copia de la misma.

5. LOS DERECHOS VULNERADOS



La internación prolongada de niñas, niños y adolescentes en clínicas que están diseñadas para la atención de episodios agudos vulnera múltiples derechos que se encuentran establecidos tanto en la normativa internacional como en la nacional, en especial en la aplicación de prácticas institucionales en etapas vitales de crecimiento y conformación de la personalidad como así también en la protección de la salud mental, el respeto y el ejercicio del derecho a la libertad. En definitiva, se incumple con la obligación por parte del Estado de brindar protección integral a la niñez y adolescencia.

La normativa internacional a la que se encuentra obligado el Estado uruguayo, en el caso planteado en la presente acción, se ve vulnerada en varias disposiciones como ser:

El Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad como un principio universal: *“Todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y a la seguridad de su persona”*. Se considera que no se justifica la permanencia en una clínica una vez otorgada el alta médica, debido a las estrictas condiciones de encierro, que vulneran la libertad de niñas, niños y adolescentes.

El Art. 6 de la Convención de los Derechos del Niño promueve la supervivencia y el desarrollo, lo cual implica proporcionarle al niño o adolescente las condiciones óptimas para su desarrollo, debiéndose otorgar un medio adecuado que garantice el desarrollo mental, físico, espiritual, moral, social, de forma compatible con la dignidad humana, y los fortalezca para una vida individual y autónoma en la sociedad.

El Art. 19 de dicho instrumento internacional resguarda al niño contra *“toda forma de abuso físico o mental”* mientras estén a cargo de sus padres o representante legal o de cualquier persona que lo tenga a cargo.

En el Art. 20 de la Convención se obliga al Estado a proporcionar a los niños privados de su medio familiar, protección especial y asegurar que puedan vivir en un establecimiento especial y adecuado.

En el Art. 25 se reconoce el derecho del niño a la protección o tratamiento de su salud mental, a un examen periódico del tratamiento y de las circunstancias propias de la internación.



Por su parte, el Art. 28 reconoce el derecho del niño a la educación el que debe ser ejercido en igualdad de oportunidades para que pueda desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta el máximo de sus potencialidades. La interrupción de la educación formal, afecta a los niños, niñas y adolescentes internados en el sanatorio, considerando el prolongado tiempo que permanecen con el alta médica.

Se afecta el interés superior del niño como principio, en tanto que hay un conjunto de acciones que no garantizan el desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan un desarrollo pleno para alcanzar el mayor bienestar posible. En este sentido, debe tenerse presente lo previsto en el Artículo 6 del CNA que dispone que el interés superior del niño consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana precisando que *“este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos”*.

A nivel Constitucional se encuentran afectados los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 (libertades individuales) y 44 (derecho a la salud y obligación del Estado a las prestaciones de salud adecuadas).

La permanencia de un niño, niña y adolescente en el sanatorio con alta médica se considera privación de la libertad ilegítima, y constituye un trato inhumano causando sufrimiento, mental o físico. La protección a su vida privada se ve afectada atento al sistema de vigilancia extremo empleado en el sanatorio.

Asimismo, en nuestro ordenamiento positivo vigente, la situación planteada colide con las disposiciones del CNA conforme al principio general establecido en el Artículo 8 que expresa que los derechos de los niñas, niños y adolescentes *“... serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales”*.

Específicamente el artículo 10 dispone *“Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo”*.

Por su parte el artículo 3 de este cuerpo de normas prevé el principio de protección de derechos de los menores de edad disponiendo que *“Todo niño y adolescente tiene*



derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Es aplicable a estos casos lo previsto en el CNA referido a los objetivos fundamentales en materia de menores de edad. El artículo 7 literal B establece que *“Deberá asegurarse una protección integral de los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas situaciones”.*

Por su parte, la situación que se denuncia no se encuentra en consonancia con los principios rectores establecidos en el artículo 3 de la Ley de Salud Mental (Ley Nro. N° 19.529 aprobada el día 24 del mes de agosto de 2017) y los derechos consagrados en el artículo 6 de dicha ley.

El INAU, como órgano rector en políticas de infancia, es el responsable de las mismas según lo establece el artículo 68 del Código. Expresamente, el artículo 21, establece el deber de éste instituto en; *“velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, correspondiendo fundamentalmente a la familia y a los sistemas de salud y educación su seguimiento hasta la mayoría de edad”*, conforme al principio de concurrencia que emerge del artículo 7° de este Código. A su vez el artículo 22 literal B establece líneas de acción concretas: *“La creación de programas de atención integral, para aquellos que lo necesiten, por carencia temporal o permanente: niños y adolescentes con capacidad diferente, situación de desamparo o marginalidad”.*

6. PRUEBA

A fin de acreditar los hechos referidos, se ofrecen las siguientes probanzas:

1) DOCUMENTAL:

- A)** Informe del MNP N° 69/MNP/2016, identificado con la letra “A”.
- B)** Expediente N° 21171-18 respuesta INAU al MNP, “Pedido de información de MNP: Salud mental. Niñas/os y adolescentes en clínicas y/u hospitales con alta médica” con la letra “B”
- C)** Listado de niños, niñas y adolescentes internados en la Clínica API Los Robles, identificado con la letra “C”.
- D)** Listado de niños, niñas y adolescentes internados en el Centro de Salud Mental Klinos, identificado con la letra “D”.



- E) Oficio Nro. 520-2019, identificado con la letra “E”
- F) Se oficie al Juzgado Letrado de Familia de 26° Turno, a efectos de remitir testimonio del Expediente IUE 436-575-2015, tramitado en Autos caratulados: “-----, CNA Ley 17823”

2) INFORMES :

- A) De considerarse necesario por la Sede, se oficie a la Clínica API Los Robles con domicilio -----, a fin que brinde, en forma urgente, información actualizada sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes que permanecen internados luego del alta médica, indicando, nombre completo, fecha de ingreso y de alta médica, facilitando en todos los casos copia de cada una de las altas médicas y si existió una visita de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo el día 26 de Febrero del año en curso
- B) De considerarse necesario por la Sede, se oficie al Centro de Salud Mental Klinos con domicilio -----, a fin que brinde, en forma urgente, información actualizada sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que permanecen internados luego del alta médica, indicando, nombre completo, fecha de ingreso y de alta médica, facilitando en todos los casos copia de cada una de las altas médicas y si existió una visita de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo el día 27- de Febrero del año en curso.

7. DERECHO

Se funda el derecho en las normas citadas en el cuerpo de este escrito y en las disposiciones de la Ley Nº 17.823 Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 195 y la Ley Nº 16.011, de fecha 19 de diciembre de 1988.

8.PETITORIO

En virtud de lo precedentemente expuesto al Sr Juez se SOLICITA:

1. Se tenga por presentada, por constituido el domicilio con los recaudos adjuntos.



2. Se tenga presente la acción de amparo interpuesta.
3. Se disponga de forma inmediata y urgente medidas cautelares que hagan cesar la grave vulneración de derechos, ordenándose al INAU a derivar a las niñas, niños y adolescentes con alta médica alojados en las clínicas para episodios agudos (Clínica Salud Mental Klinos y Clínica Api Los Robles) a lugares apropiados conforme a las indicaciones médicas explicitadas en las altas médicas correspondientes.
4. Se disponga, en definitiva, que el INAU diseñe los mecanismos adecuados de seguimiento y acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes que ingresan a centros para atención de crisis en fase aguda, que garantice sus derechos y permita prever una derivación oportuna y adecuada al proyecto de atención integral de cada niña, niño o adolescente.

OTROSÍ DICE PRIMERO: Que autoriza a las Trabajadoras Sociales María José Doyenart y Soledad Pérez y a los Dres. Juan Faroppa, Daniel Díaz y Álvaro Colistro a notificarse, examinar y retirar el expediente.